

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
SALA QUINTA DE DECISIÓN SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE	COTRAFA SOCIAL
DEMANDADO	COLPENSIONES
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO
RADICADO	05088-31-05-001-2018-00594-01
SEGUNDA INSTANCIA	CONSULTA
DECISIÓN	DECLARA INADMISIBLE GRADO DE CONSULTA

AUTO INTERLOCUTORIO No.012

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°056 de 2022, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver sobre la admisibilidad del GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA respecto de la Sentencia No. 267 del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, dentro del Proceso Ordinario Laboral de Única Instancia promovido por **COTRAFA SOCIAL** en contra de **COLPENSIONES**.

ANTECEDENTES

La **EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES – COTRAFA SOCIAL** promovió proceso Ordinario Laboral de Única Instancia en contra **COLPENSIONES**, a fin de que: **1)** Se declare la existencia o el reconocimiento del auxilio funerario otorgado por la demandada en Resolución GNR 316265 del 27 de octubre de 2016, derivado del fallecimiento del señor ANSELMO DE JESÚS BUSTAMANTE CARDONA. **2)** En consecuencia, se condene a **COLPENSIONES** al reconocimiento y pago del citado auxilio funerario debidamente indexado (f. 2 a 6 Archivo 01 ED).

A lo expuesto se opuso la entidad accionada **COLPENSIONES**, tras considerar que ya había efectuado el pago del emolumento reclamado, por lo que propuso las excepciones de: “(...) *INEXISTENCIA DE RECONOCER Y PAGAR EL RETROACTIVO PENSIONAL; PRESCRIPCIÓN, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, BUENA FE DE COLPENSIONES, COMPENSACIÓN e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS* (...)” (f. 77 a 82 Archivo 01 ED).

SENTENCIA

Mediante Sentencia No. 267 del 18 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello absolvió a **COLPENSIONES** de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la **EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES – COTRAFA SOCIAL**, a quien condenó en costas procesales.

Así mismo, dispuso la remisión del expediente ante esta Sala para surtir el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en favor de la demandante.

ACTUACIÓN PROCESAL

Mediante Auto del 8 de marzo de 2021 se dispuso la admisión del grado de consulta conforme lo establecido en el artículo 69 CPLSS, para posteriormente correr traslado a las partes para sus alegaciones finales, al tenor del Decreto 806 de 2020.

PROBLEMA (S) A RESOLVER

Visto lo anterior, debe decidir la Sala si es procedente conceder el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA frente a la Sentencia de Única Instancia No. 267 del 18 de noviembre de 2021 emanada del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, y en caso negativo, se estudiará la posibilidad de dejar sin efecto la actuación que dispuso su trámite.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en el procedimiento laboral la Consulta aparece reglamentada en el artículo 69 CPLSS, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007 que reza:

“Artículo 69. Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.

También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y

Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior” (Resaltos fuera de texto).

En ese sentido, pese a que la norma en su sentido primigenio establece que solo serán consultables las “*sentencias de primera instancia*”, excluyendo de allí las decisiones de única instancia proferidas a partir del procedimiento reglado en los artículos 70 y 73 CPLSS, en Sentencia C-424 de 2015, la Corte efectuó el estudio de constitucionalidad al artículo 69 CPLSS, considerando que:

“(…) 4.5.5.1. El grado de consulta no es un recurso o medio de impugnación, lo que implica que es ajeno a la actividad que pueda desplegar el demandante sea en causa propia o a través de apoderado judicial. En ese sentido, la ley protege con más garantías al trabajador que tiene un pleito de mayor cuantía frente a aquel cuyas pretensiones son inferiores a los 20 Sml/v; tal y como se desarrolló en el marco normativo, es de la esencia de este control jurisdiccional, revisar integralmente la legalidad del fallo con el único propósito de garantizar los derechos de las partes, entre ellas a la más débil de la relación, y con ello una efectiva administración de justicia. Por anterior, los derechos reclamados en única instancia reciben un trato injustificado al excluir de la revisión de la legalidad del fallo totalmente adverso del control judicial de consulta. En la jurisprudencia constitucional, los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores no pueden ser desprotegidos en función de su valor pecuniario.

4.5.5.2. Ante la desproporción del sacrificio de los derechos de los trabajadores mediante la adopción de un mecanismo de descongestión, encuentra la Sala Plena que la norma sólo sería constitucional bajo el entendido de que las sentencias de única instancia que consagren derechos mínimos e irrenunciables y que sean totalmente adversas a los trabajadores, deberán ser trasladadas dependiendo del superior funcional del juez que profiera la sentencia totalmente adversa al trabajador, es decir: (i) si la sentencia desfavorable para las pretensiones del trabajador es dictada por el juez laboral o civil del circuito-en los lugares donde no hay laboral- en primera o única instancia, dicho funcionario deberá enviar el proceso a la respectiva Sala Laboral del Tribunal de su Distrito Judicial para que se surta el grado de consulta y, (ii) cuando el fallo sea proferido en única instancia por los jueces municipales de pequeñas causas será remitido al juez laboral del circuito o al civil del circuito a falta del primero. Sin que el condicionamiento habilite a las partes a interponer los recursos propios de una sentencia de primer grado o el recurso extraordinario de casación. (...)”.

Por consiguiente, en la decisión comentada el Alto Tribunal dispuso: “(...) Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, la expresión “*Las sentencias de primera instancia*” contenida en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, **las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario.** (...)” (Negrilla y Subraya de la Sala).

Al aterrizar las anteriores circunstancias al caso en concreto, encuentra la Sala que, pese a tratarse de una sentencia de única instancia, y que la misma tuvo un sentido adversarial a los intereses de la *parte promotora de la litis*, lo cierto es que ello no es suficiente para dar paso a la consulta de la decisión que finalizó la instancia, dado que el extremo activo no tiene la condición de “(...) *trabajador, afiliado o beneficiario* (...)”, sino que corresponde a una persona jurídica de origen privado, naturaleza que, como puede observarse, no aparece dentro de las clasificación efectuada por la Sentencia de Constitucionalidad, que propendió por salvaguardar los derechos de esa parte débil de la relación jurídica ventilada en sede judicial, pero en parte alguna señaló que ello también procedería cuando una entidad de las características señaladas fuese quien, como demandante, terminara derrotada con una sentencia totalmente contraria a sus reclamos.

De hecho, resáltese como dicho de paso, que la Sentencia en cita ni siquiera extendió la posibilidad de revisión en consulta en favor de las entidades de derecho público en el evento de llegar a ser condenadas en procesos de única instancia.

Tal como ha sido reconocida por la jurisprudencia, la consulta es un mecanismo para la protección de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador afiliado o beneficiario, a fin de conjurar la afectación o vulneración que pueda derivarse de una sentencia judicial adversa a la totalidad de sus pretensiones. La protección se habilita frente a estos sujetos, para garantía de sus derechos esenciales de índole laboral o prestacional, en consideración al carácter tuitivo, protector del derecho social, por lo que no estando de por medio el derecho del destinatario directo de la prestación, no emerge la condición subjetiva que habilita el grado de consulta.

Por lo anterior es dable considerar equivocada la decisión de remitir el proceso en consulta ante esta Sala, razón por la que, habrá de dejarse sin efectos los Autos emitidos el 8 de marzo de 2022 y el 19 de mayo de 2022, a través de los cuales se admitió erróneamente el grado de consulta y se corrió traslado a las partes para que rindieran sus alegaciones, para en su lugar, declarar inadmisibile el grado de consulta dentro del presente asunto en razón de lo expuesto, disponiéndose la devolución del proceso al juzgado de origen.

Valga aclarar que, no impide asumir la determinación descrita el hecho de que se encuentre en firme una decisión anterior en sentido de admitir la consulta en favor del ente accionante, en atención a que la Sala debe propender por la correcta aplicación del procedimiento, en tanto es deber del Juez de conocimiento, en este caso la Corporación, modificar o revocar las decisiones aun después de estar en firmes, en procura de resolver las distintas vicisitudes con acatamiento de lo señalado en el orden jurídico, conforme lo ha expuesto de antaño la Jurisprudencia Constitucional y Laboral (T-1274-2005 y AL3859-2017).

Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: DEJAR sin efectos los Autos emitidos el 8 de marzo de 2022 y el 19 de mayo de 2022, a través de los cuales se admitió erróneamente el grado de consulta en favor de la demandante y se corrió traslado a las partes para que rindieran sus alegaciones, respectivamente, para en su lugar, **DECLARAR** inadmisibles el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA respecto de la Sentencia No. 267 del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, dentro del Proceso Ordinario Laboral de Única Instancia promovido por **COTRAFA SOCIAL** en contra de **COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, **DEVUÉLVASE** el expediente contentivo del citado proceso al Juzgado de Origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

SALVA VOTO



SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

Proceso: ORDINARIO
Demandante: Cotrafa Social
Demandado: Colpensiones
Radicado: 0508831050012018059401
Fecha: octubre 31 de 2022

Con profundo respeto por la decisión mayoritaria que ha adoptado la Sala en este proceso, me permito expresar mi voto disidente en cuanto se decide declarar inadmisibile el grado jurisdiccional de consulta.

No se comparte la providencia en cuanto a la conclusión de que en el sub lite el extremo activo de la relación procesal no tiene la condición de “(...) trabajador, afiliado o beneficiario (...)” y por ende no procede en su favor el grado jurisdiccional de consulta en su favor previsto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social en concordancia con la sentencia C415 de 2015.

Lo anterior teniendo en cuenta que la beneficiaria del derecho al auxilio funerario causado en virtud del fallecimiento del señor ANSELMO DE JESUS BUSTAMANTE CARDONA, señora GLADYS ELENA BUSTAMANTE TAPIAS, confirió poder a COTRAFA EMPRESA DE SERVICIOS SOCIALES, para el cobro en sede administrativa del auxilio funerario (*folios 12*

01.ExpedienteDigitalizado.pdf) e igualmente otorgó poder para iniciar el proceso judicial que hoy nos ocupa (folios 09 01.ExpedienteDigitalizado.pdf).

Se rememora que de conformidad con el artículo 2142 del Código Civil «*El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.*»

Adicionalmente, en sede administrativa la promotora del proceso –COTRAFA– fue reconocida en calidad de apoderada de la señora Bustamante Tapias, tal como consta en la Resolución GNR 316265 del 27 de octubre de 2016 y en ese sentido COTRAFA ocupa el lugar de la beneficiaria.

El planteamiento anterior, a mi juicio, hacía viable el trámite del grado jurisdiccional de consulta.

Cordialmente,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada